

EL ALCALDE

REVISTA DE ADMINISTRACION LOCAL Y DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES

Se publica cuatro veces al mes ☐ Abogado asesor: D. Enrique García y García

PRECIOS DE SUSCRIPCION: QUINCE pesetas al año, y al mes DOS pesetas — PAGO ANTICIPADO

NUMERO 1.170

Se despachan las consultas gratis si afectan al cargo que desempeña el suscriptor.—Por las consultas de Derecho : : : : : se abonará 10 pesetas : : : : :
Toda la correspondencia al Administrador de EL ALCALDE: Desengaño, 12. Madrid

30 Junio de 1924

TABLILLAS PARA VEHICULOS

En virtud de la orden terminante publicada en la *Gaceta* de 26 de junio para que los Ayuntamientos se provean de los útiles para la numeración y precinto de las tablillas de todo carro o vehículo de tracción animal que existen en cada localidad, esta Administración facilitará todos los útiles necesarios para cumplir debidamente este mandato.

El lote consiste en un abecedario de cinc para estampar el nombre del pueblo, con su tinta china, la más permanente, con su brocha correspondiente.

Una colección de números del 1 al 0 del mismo metal para la numeración, con igual tinta.

Una tenaza de acero bruñido para aplastar el plomo, o sea el precinto, con las iniciales grabadas de la población correspondiente.

Un rollo de alambre para sujetar la tablilla, galvanizado, para evitar la herrumbre.

Todo el lote referido por 30 pesetas. Pago, al hacer el pedido, y facturación gratis a la estación que se nos indique.

Todo ese material es bastante por muchos carros que haya a numerar.

Tablillas de madera escogidas, bien cepilladas y esmaltadas en blanco, para que se destaque bien el número y el nombre del pueblo, con sus agujeros para pasar el alambre, a una peseta pieza, para los que adquieran el lote de utensilios, y a 1,25 para los que no lo adquieran.

SUMARIO.—Los nuevos ricos?—El voto de la mujer.—Camino de la Federación.—Fin de una campaña, otra instancia.—Consulta.—Departamentos ministeriales, Hacienda, Débitos y créditos.—Gobernación, Fondos carcelarios. Vías Pecuarias.

¿LOS NUEVOS RICOS?

Los Secretarios municipales del distrito de Ocaña han celebrado una fraternal fiesta en la que aprueban unas conclusiones interesantes en pró de la clase.

Estas conclusiones son:

Que pasen los Secretarios a ser funcionarios del Estado con todos los derechos y deberes inherentes.

Declarar obligatorio que en cada Secretaría de Ayuntamiento haya, por lo menos, un auxiliar por cada mil habitantes, y que el haber de estos auxiliares sea como mínimo en los dos sextos, y como máximo los cuatro sextos, del que disfrute el Secretario.

Tener derecho a pensión de los Municipios en que hayan desempeñado su cargo, en igualdad de circunstancias y cuantía que el Estado tiene concedido a los funcionarios civiles.

Orfandad para sus viudas o hijos.

Concesión del derecho a permutas entre Secretarios de la misma categoría y sueldo.

Los Secretarios que se encuentren sin cargo y no ten-

gan nota desfavorable podrán concursar a Secretarías de la inferior categoría, siempre que acrediten por lo menos diez años de servicios.

Y, por último, los oficiales de Secretaría podrán ingresar en el escalafón de Secretarios siempre que acrediten haber desempeñado su cometido sin la menor nota por lo menos ocho años.

Con lo que se dió por terminado el acto, reinando la mayor armonía, entusiasmo y espíritu de compañerismo.

De muy buena fe enviamos nuestro aplauso a los Secretarios del distrito de Ocaña, no por los acuerdos que acabamos de citar, sino por haber llevado a la práctica la hermosa y provechosisima idea de reunión periódica de los compañeros en un distrito o partido judicial, pues de esta suerte no sólo se estrechan los lazos de amistad particular y compañerismo, sino que cambiando impresiones acerca de todo lo que puede afectar a la clase y al cargo, aquélla auna medios y esfuerzos para su engrandecimiento, y éste se facilita y mejora mediante la discusión de asuntos difíciles, que entre todos quedan estudiados haciendo, una verdadera pro-labor beneficiosa.

Así lo entendieron los sensatos, y vemos cómo los Pá-

Ayuntamiento de Madrid

procos rurales se reúnen periódicamente. Así lo entendieron los legisladores, estableciendo las excursiones campestres en las escuelas, medio de recreo e instrucción para los niños, que hacen amistades con los de los vecinos pueblos, que han de ser amigos mañana cuando sean hombres los niños de hoy, con lo que implícita y espontáneamente se hace Patria, y los Preceptores, insensiblemente también, depurando procedimientos pedagógicos los unifican lográndose de esta suerte, de muchos hombres, un sólo esfuerzo, grande, poderoso, decisivo en bien de los ciudadanos.

Conste, pues, nuestro alabanza para aquellos Secretarios, por el espíritu de compañerismo de que se encuentran animados; pero no podemos felicitarles, y lo sentimos, por las conclusiones elevadas al Jefe del Gobierno.

Precisamente en estos momentos, y como consecuencia de un estudio muy detenido de los artículos del Estatuto Municipal, con referencia al Secretariado, hemos terminado una campaña y hacemos hoy gestiones en favor de los Secretarios cesantes que quedan fuera del Cuerpo, y de las que desempeñando interinamente una Secretaría desde muchos años antes de la publicación del Estatuto quedan también excluidos por la aplicación a la letra del artículo 234, habiendo solicitado el ingreso en el Cuerpo, o derecho para ingresar, de estos funcionarios, aduciendo a tal propósito cuantas razones estuvieron a nuestro alcance, fijando un límite de uno o dos años de anteriores servicios en una o varias Secretarías de Ayuntamiento, pero no diez años, pues tal período de tiempo de servicios supone por regla general bastantes de edad, y por consiguiente, una limitación al derecho que el artículo 233 concede a los Secretarios de la segunda categoría para pasar a la primera, toda vez que para acogerse a tal beneficio serían menester veinte años de servicios.

No es esta consideración solamente la que oponemos a las conclusiones de referencia, pues hay otra muy importante, cual es: Si el Secretario nombrado en propiedad, veinticuatro horas antes de la publicación del Estatuto, queda perteneciendo al Cuerpo de Secretarios, sin más méritos, sin más servicios, sin más demostraciones de competencia que una absurda razón de casual puntualidad, ¿por qué se han de exigir diez años de servicios, al que en uno solo ha hecho más méritos, ha de mostrado más competencia o por lo menos la ha adquirido?

No vemos el fundamento de los diez años, ni el cariño que merece el que fué compañero, ni el respeto al que fué un igual y azares de la suerte le colocaron en plano inferior. No vemos tampoco la hidalguía que la ayuda entraña toda vez que se ponen trabas no solo para el ingreso, sino para el mejoramiento dentro de la carrera.

Aún hay más que decir y es que tampoco entendemos la redacción de la conclusión a que nos referimos, que dice así: «Los Secretarios que se encuentren sin cargo y no tengan nota desfavorable, podrán concursar a Secretarías de la inferior categoría..., etc.»

En primer lugar, hasta mañana, no existirá la carrera del Secretariado Municipal. Hoy a los Secretarios que fueron les ocurre lo mismo que a los arruinados, que

están como si jamás hubieran sido ricos; por consiguiente no hay de momento más Secretarios que los reconocidos por la Ley, y éstos están todos «con cargo», es decir con Secretaría.

En segundo lugar, no hay categoría inferior, no hay más que primera y segunda, y por cierto bien determinadas, no siendo posible que a la primera de las categorías establecidas puedan ser destinados los que no reúnan la condición necesaria de ser Licenciado en Derecho, título académico que no creemos pierda su virtud, por la conmiseración de unos compañeros que ofrecen a su poseedor «el rincón en el pajar para pasar la noche.»

No es esto bastante; era preciso aumentar el menosprecio a los ex-compañeros, a los que para que puedan volver a ser Secretarios, habrá de exigírseles cuando menos diez años de servicios, y nada más que ocho a los oficiales de Secretaría (para ser Secretarios), sin duda porque aquellos Secretarios eran muy torpes, y estos oficiales aprendieron bien y mucho con las doctrinas de los nuevos Secretarios.

Esto, no obstante, repito el aplauso consignado al principio de estas líneas.

Madrid, 4 de junio de 1924.

GARCIA

El voto de las mujeres

Se ha discutido, y aun se discute, la novedad que supone la concesión de voto—la facultad de ser elector y elegible—a favor de las mujeres, y aunque la discusión ofrece infinidad de matices, desde el estudio serio y concienzudo de la cuestión, hasta los más extraordinarios de lo bufo, hemos observado que no se ha combatido reconociendo más o menos categóricamente el espíritu de progreso que la novedad entraña, y aun más se ha consolidado esta apreciación con la publicación del Real decreto de 10 de abril del año actual, por el que se elimina a determinada clase de mujeres, en las que precisamente encontraba base y fundamento el comentario jocoso de la disposición.

Para tratar esta cuestión es preciso tener en cuenta la significación de la mujer en la sociedad, y encontramos que en todos tiempos su influencia ha sido notoria, y por regla general beneficiosa, tanto en su apreciación como tal mujer—esposa o madre—cuanto como interesada y gestora en los negocios públicos, al extremo de que aunque pocos algunos nombres de mujeres ilustres registra la Historia de las Naciones, hecho de gran importancia en las mujeres apartadas de intento no solo del camino de la celebridad y de la gloria, sino de la realización de todo aquello que pudiera tener una importancia mayor o menor en la vida de los pueblos.

Es, sin duda, muy de justicia reconocer en la mujer las condiciones de capacidad e indoneidad que se han venido atribuyendo al hombre con exclusivismo irrisorio; pero no es menos cierto que tal capacidad ha de ser adquirida por la mujer mediante una instrucción mucho más completa que la que hasta ahora ha recibido.

dedicada a labores de familia en completo abandono de toda clase de estudios que «se han considerado impropios de su sexo», precisamente por haberla considerado—sin fundamento alguno para ello—y siempre «a priori» incapaz para compartir con el hombre el cotidiano trabajo.

A pesar de las modernas orientaciones que ha hecho mecanógrafas, jefes de ventas en grandes almacenes, auxiliares de contabilidad y contables, dedicando a las mujeres a empleos que de antiguo eran función destinada solo para los hombres, hoy existen muchas en la esclavitud de unos deberes familiares en los que atrofian su inteligencia bajo la máscara de moralidad de «mujer honrada» cuya honradez no se ha puesto a prueba en reñida lucha con los embates durísimos de la pasión y de la maldad con que a cada instante se tropieza en los ásperos senderos de la vida, sino que tal honradez ha prevalecido siempre y solamente bajo aquella máscara a cuyo través se observan con frecuencia unos ojos muy brillantes elevados al Cielo evocando la visión del Crucificado, o torvos, vueltos en horror, en el mayor espanto, ante el reruerdo de «los puños» del marido, que según la ley, es el que manda, y según los usos es el dueño de la esclava, es el amo de su casa, y en algunas clases sociales es «el hombre», personalidad con características de impudicia y repugnancia tales, que nos obligarían a rechazar hasta doctrinas teológicas que respetamos mucho.

En este ambiente la mujer ¿es posible considerarla con la plenitud de derechos, cuya concesión aplaudimos y cuyo aumento nos atreveríamos a pedir?

No nos decidimos a contestar la pregunta, pero... pensamos: Si la mujer casada vé cercenados estos derechos por razón de la influencia que sobre la misma puede ejercer el marido, porque éste pudiera tener dos votos en lugar de uno, porque su voluntad, su criterio, trascendiera por mediación de la mujer a la resolución de asuntos oficiales, tampoco encontramos una absoluta garantía de independencia en el resto de las mujeres, hecha la exclusión que determina el Real decreto de 10 de abril, afirmación que hacemos dejando a salvo toda clase de respetos y solo bajo el aspecto de análisis de esta cuestión.

Si sospechamos que sobre aquél número de mujeres que queda libre de las exclusiones legales, puede en algún caso ejercerse alguna coacción—siquiera sea de buena fe—hasta por sus propios sentimientos religiosos ¿no sería una manera de compensar tal presión, la concesión de esos derechos a las excluidas por el citado Real decreto? Es posible que pudiera argumentarse muy bien una contestación afirmativa; pero si tal solución pudiera entrañar grandes peligros, creemos sin duda la mejor de todas considerar primordialmente capacitadas aquellas mujeres que cursaron algunos estudios, siquiera sean solamente los del Grado de Bachiller, pues es indudable que la razón poderosa que asegura la pureza del pensamiento y de la conducta de las personas es la instrucción sólidamente adquirida en honrados principios de virtud y ciudadanía.

19-Abril-1924.

CAMINO DE LA FEDERACION

En la exposición de bases del Estatuto Municipal se dice con referencia a la creación del Cuerpo de Secretarios «Ellos (los Secretarios) habrán de agradecerlo, porque así se les aleja del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político.»

Así lo entendimos, tributando un aplauso muy sincero a estas disposiciones, aplauso que reiteramos hoy, porque la mejora obtenida por la clase secretarial es un hecho cierto, innegable; pero algo más queda que hacer, y no es justo esperar todo del Gobierno, que no puede descender a detalles y pormenores que forzosamente se escapan al estudio de la reglamentación, y que indudablemente pueden y deben llevarse a la práctica mediante el esfuerzo particular de la clase a que afectan.

Así como observamos que quedaban en olvido algunos Secretarios, que en el antiguo régimen no supieron o no pudieron defenderse, e inmediatamente acudimos a su defensa, hoy, estudiando al detalle el articulado del Estatuto en lo que a los secretarios se refiere, advertimos que la situación de éstos ni es tan segura, ni es tan ajena a las luchas políticas como sin duda se ha pretendido por el legislador, pues si bien del texto del artículo 236, se deduce la precisión de concurrencia de varios requisitos y circunstancias para llevar a efecto la destitución del Secretario no es menos cierto que ya éstos tuvieron una legislación que las amparaba del mismo modo, determinando las causas de destitución y la necesidad de formación de expediente con audiencia del interesado, y sin embargo, después de publicado aquel Decreto a que aludimos, los Secretarios fueron destituidos sin necesidad de acudir al procedimiento marcado por la ley, y cuando los perjudicados acudieron a ésta, entablado el correspondiente recurso, en su tramitación se experimentaba la acusación de que el tal Decreto había pasado por la «Gaceta» como sin dejar rastro, sin que se hubiera visto, sin tener efectividad alguna, ocurriendo esto porque su realidad se veló desde el primer momento, tal vez por la influencia política en las ciudades, sustentadoras de ciertas impunidades en los pueblos.

Antes de ahora hemos sostenido, aplaudiendo la obra de purificación del Directorio, que en la actualidad no existen la parcialidad, ni los «favores» que nacieron y cómodamente vivieron en el antiguo régimen, pero queda en cierto modo desvalida la clase Secretarial, pues aun suponiendo que el artículo 236 del Estatuto se cumpla al pie de la letra, y aún más, que su contenido sea robustecido por las disposiciones del Reglamento, no ha de ser difícil a los Ayuntamientos, a los Alcaldes probar cualquiera de las dos primeras causas graves señaladas en el artículo 237 ya que por experiencia, por haberlo visto, por haber tramitado asuntos de ésta índole, hemos averiguado cómo se hacen «estas cosas» que sorprenden, y no dudamos en decirlo, la buena fe, de los que de buena fe se disponen a estudiarlas y resolverlas.

No es éste el único procedimiento a seguir para conseguir la destitución, pues hay más, muchos más, conocidos por todos los Secretarios y por todos los que he-

mos visto de cerca o intervenido en estas cosas, y no encontramos en el Estatuto medio alguno de defensa, porque ni lo hay ni puede haberlo, en razón a que las leyes no han de ser tan excesivamente casuísticas, y aunque lo fueran no es posible que tengan en cuenta todas las añagazas, verdaderas «martingalas» que especialmente, casi exclusivamente en los pueblos se ponen en práctica para desnaturalizar las disposiciones legales «en la forma más legal posible», como hemos oído decir a un Alcalde hace algunos años.

Es realmente a los interesados—a los Secretarios—a quienes incumbe hacer desaparecer estos males y estas posibles amenazas de su tranquilidad en el cargo; pero la apatía, la falta de unión, la formación, cuando más de Asociaciones regionales, desunidas, distanciadas con diferentes aspiraciones y finalidades, y por regla general desarrollándose en una vida de agobio por el limitado campo de acción en que se mueven, determinan una falta de significación social y de medios para poder elevar sus quejas a quien puede atenderlas y que sin duda las atendería por el carácter de unanimidad, que excluye la posibilidad de que el lamento de unos sea el ideal de otros, con lo que no podía jamás conseguirse el bienestar de todos.

A todo esto podía contestarse, y no faltará quien piense de este modo, que una vez constituido el Cuerpo de Secretarios, se hacen innecesarias las asociaciones, sean provinciales o regionales, como innecesaria habría de ser la general que pudiera planearse; pero tal modo de pensar es perfectamente erróneo, pues si bien las pequeñas asociaciones, ya la práctica, ha demostrado su ineficacia aun en los tiempos para ellas más favorables, la Asociación general, perfectamente compatible con la nueva organización del Secretariado, constituiría un poderoso auxiliar para la aplicación del Estatuto, en toda su pureza, es decir, conforme el espíritu que le informa, facilitando a la vez la adopción de medios, previa la

aprobación del Gobierno, para el engrandecimiento o mejora de los intereses de la clase. Un caso práctico lo encontraríamos en la aplicación del párrafo 2.º del artículo 234 del Estatuto, que puede determinar la condición de poderoso del Montepío de los Funcionarios Municipales de España haciendo más llevadero el gravamen que los derechos pasivos suponen en los presupuestos municipales, más igual o equitativo el prorrateo, y mayores beneficios para los asociados, por el aumento de fuentes de ingreso de capital, toda vez que se aumentan los conceptos de producción. Si a esto se une la creación de unos Inspectores que ejerciendo sus cargos previa la necesaria autorización oficial como Delegados de la Asociación, inspeccionen, estudien y analicen los casos de incompatibilidades de los Secretarios con los vecinos del Municipios donde ejerzan su cargo, y razonada o imparcialmente expongan a la Sociedad general de Secretarios, el resultado de su investigación, para que ésta en su caso proceda con todos los respetos a solicitar del Gobierno, en caso necesario, la concesión de los servicios observados y el castigo del perturbador del orden establecido, habremos obtenido el ideal del Secretariado, ya que no ha conseguido aún su directa dependencia del Estado, por la que tanto ha luchado. sin extrañarnos su fracaso en este sentido, pues aunque hemos aunado nuestro esfuerzo en tal empeño jamás se nos ocultaron las dificultades que para su logro existen, y algunas de ellas nacidas por el natural y lógico egoísmo de los mismos que se considerarían beneficiados.

Importante es el asunto y merece estudiarse. adueñarse verdaderamente de su importancia y transcendencia y si de tal estudio resulta la convicción de su utilidad práctica, es más de su necesidad, casi diríamos de su urgencia, nuestro esfuerzo está a disposición de los Secretarios, a quienes ofrecemos la idea, constantes en nuestros propósitos de trabajar siempre en su favor hasta conseguir el triunfo de sus ideales.

FIN DE UNA CAMPAÑA

Excmo. Sr.

Don Antonio Aleu, mayor de edad, de esta vecindad y con domicilio en la calle del Desengaño núm. 12, Director de la Revista de Administración «El Alcalde», con el debido respeto expone:

Que en varios números de la revista que dirige ha venido ocupándose de los Secretarios de Ayuntamiento que antes de la publicación del Estatuto municipal, y por consiguiente antes también de la constitución del cuerpo de estos funcionarios, renunciaron sus cargos, bien por una conveniencia puramente particular, bien a consecuencia de antagonismos frecuentes en los pequeños pueblos, quedando hoy fuera del cuerpo recientemente creado y sin derecho a ingresar en el mismo más que realizando los ejercicios de oposición.

Como quiera que la situación de desamparo en que quedan estos funcionarios es tan absoluta y tan triste-

mente transcendental, pues sus consecuencias llegan a sus familias, bien ajenas en la casi totalidad de los casos a las luchas políticas de los pueblos, en las que por regla general el Secretario no oficia más que de sacrificado, absorbiendo quiméricas responsabilidades en asuntos en que no interviene porque la ley se lo prohíbe y hasta por su propia conveniencia, bien conocedor el que suscribe de la razón que a estos modestos y probos funcionarios les asiste para solicitar su ingreso en el Cuerpo de Secretarios, como recompensa a sus muchos años de servicios y a veces de cruentos sacrificios, retribuidos con el mezquino sueldo que anteriormente se les asignaba, y convencido igualmente por el constante trato con ellos, de la situación de miseria en que viven con sus familias en las que hay niños que ni pueden educarse, ni aún siquiera alimentarse como a su edad corresponde, no duda en hacerse eco de estas legi-

timas aspiraciones, elevando a V. E. la súplica de que puedan ingresar en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento aquéllos funcionarios hoy cesantes, pues en realidad, a más de que tal pretensión nos parece justísima, la queremos encontrar perfectamente acoplada a las disposiciones legales.

Si por el párrafo 3.º del artículo 234 del Estatuto municipal se dispone que «Los Secretarios que actualmente desempeñen en propiedad sus cargos conservaran los derechos adquiridos», parece que puede alegarse esta disposición como fundamento de derecho, para justificar nuestra súplica, ya que los Secretarios que con anterioridad a la publicación del Estatuto desempeñaron sus cargos sin tacha alguna, dando pruebas durante muchos años de laboriosidad y competencia, indudablemente REUNEN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LOS QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑEN EN PROPIEDAD SECRETARIAS.

El mismo Estatuto en el que pretendemos refugiarnos, en su artículo 238, párrafo 2.º, reconoce la posibilidad del pase de la categoría inferior a la superior dentro del cuerpo, en atención a los servicios prestados sin tacha alguna, y si el mismo Estatuto municipal reconoce en estos servicios un argumento, una razón para mejorar de categoría, parece justo SE RECONOZCA IGUALMENTE PARA CONSERVAR UNOS DERECHOS QUE NO SE HAN PERDIDO POR RAZON DE INDIGNIDAD NI OTRA SEMEJANTE.

Por tanto:

A V. E., con el mayor respeto, suplico: Que en consideración a las razones expuestas y previo el correspondiente trámite, se digne declarar con derecho a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento a los funcionarios cesantes que no teniendo tacha legal para ejercer su cargo y reúnan las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Gracia que espera alcanzar de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid, diez y ocho de mayo de mil novecientos veinticuatro.

Excmo. Sr. Presidente del Directorio Militar.

CONSULTA

Orellana de la Sierra, 7 de junio de 1924.

Sr. Director de «El Alcalde».—Madrid.

Muy Sr. mío:

Hago a V. la siguiente consulta:

Hace seis meses se confeccionó por la junta de esta villa un reparto por utilidades caciquil y pasional. Dado cuenta al Delegado gubernativo, por los agraviados, se personó aquí, instruyó un expediente de responsabilidad donde se comprobó el fraude, pues los miembros de la junta incluso su presidente, el cura párroco, se había apropiado utilidades por valor de 600 y 700 pesetas, con lo que les correspondían cuotas de 36 y 40 pesetas, toda vez que por acuerdo de lo apuntado se gravaban estas utilidades con el 6 por 100, el Delegado comprobó que

percibían utilidades por valor de 6.000 y 4.000 pesetas dichos miembros de la junta, por lo que les correspondía en justicia pagar 760 y 1.400 pesetas de cuota. Pasó el expediente mencionado al Sr. Juez de Instrucción, el cual empezó a instruir sumario, y recibió al efecto varias declaraciones con el nombre de fraude y exacción ilegal.

Se corrió por toda la comarca la voz de que iba a ser procesado el cura, como presidente; pero ello es que el tiempo va pasando, se han paralizado las actuaciones judiciales y el expediente gubernativo aparece ahora en el Tribunal Provincial de Repartos, adonde habían acudido en reclamación los agraviados. Los amigos del cura han corrido la versión de que no es de la competencia del Delegado, ni del Juez de Instrucción el intervenir en ese asunto, y que por eso se ha paralizado el sumario. Que sólo es competente el Tribunal Provincial.

Los agraviados estiman que hay un delito en el fraude y que es de la competencia del Juez de Instrucción, toda vez que el Tribunal Provincial no puede castigar el delito, sino subir o bajar las cuotas, con lo que queda sin castigar la intención y delincuencia del acto punible. En el caso de que sea competente el Juzgado de Instrucción para seguir el sumario, a pesar de conocer el asunto el Tribunal Provincial de Repartos, ¿qué tienen que hacer los agraviados para movilizar el sumario? ¿pueden nombrar Abogado y Procurador que vigilen la instrucción del sumario y sus derivaciones?

Espero me diga a vuelta de correo el importe de la consulta para abonárselo, aunque tarde más en abonárselo. Suyo afcmo. s. s. q. e. s. m.,

JUAN SANCHEZ.

CONTESTACION

Nuestra Asesoría, evacuando la consulta que nos hace en su carta del 7 de los corrientes, es de opinión que:

Si el reparto a que hace referencia reúne las condiciones necesarias para que sea estimado legalmente como tal documento que hubiera podido ponerse al cobro si no se hubiera presentado contra el mismo la reclamación judicial que dice empezó a tramitarse, y si además es rigurosamente exacto que la junta encargada de su confección o algunos de los vocales de la misma a sabiendas y con ánimo de lucro oculte la cantidad de sus utilidades consignando una menor, es indudable que en el mismo se ha cometido una irregularidad que dá origen a la tramitación de un sumario que no debe paralizarse como ustedes dicen, pues la intervención del Tribunal Provincial de Repartos podrá enmendar o subsanar las deficiencias de dicho reparto, pero no entenderá de los hechos delictivos en el mismo cometidos o que por su medio hayan podido cometerse, los que forzosamente tendrá que poner en conocimiento del Juzgado correspondiente para la instrucción de las oportunas diligencias. Es decir, que el Tribunal administrativo lejos de evitar responsabilidades a los señores de la junta, debe exigirselas en la forma que sea procedente en orden a su competencia.

Desde luego que esos agraviados pueden nombrar Abogado y Procurador que se personen en el sumario, y solicitar la práctica de diligencias que estimen procedentes.

Departamentos Ministeriales

HACIENDA

Débitos y Créditos

Ilmo. Sr.: Para aclarar las dudas que el cumplimiento del Real decreto de 12 de Abril último y circular de esa Subsecretaría de 30 del mismo mes, referentes a liquidaciones de débitos y créditos de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos con el Estado, ha ofrecido a algunas Delegaciones y Corporaciones encargadas de aplicarla,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente:

1.º La compensación a que se refiere el apartado C) del artículo 3.º, sólo comprende los débitos y los créditos procedentes de fecha anterior a 1.º de Abril último. Los débitos y créditos posteriores serán reclamados o abonados con independencia de la referida liquidación.

2.º Los intereses de inscripciones ya emitidas por su procedencia y carácter serán abonados a la Corporación a que corresponda, en metálico, cualquiera que sea la fecha de su vencimiento.

3.º Los créditos anteriores a 1.º de Abril último de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos con el Estado, que no tengan débitos con éste, serán abonados directamente a las Corporaciones provinciales y municipales en la forma en que viene realizándose.

De Real orden lo comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 14 de Junio de 1924.

PRIMO DE RIVERA

Señor Subsecretario de Hacienda.

GOBERNACION

Fondos Carcelarios

REAL ORDEN

Visto el recurso de alzada formulado por el Alcalde de Aracena, como Presidente de la Junta carcelaria del partido judicial, contra providencia de V. S. devolviendo sin aprobar el presupuesto de obligaciones carcelarias formado por la Junta de representantes de los Ayuntamientos del partido para el ejercicio de 1924-25.

Resultando que el presupuesto de que se trata comprende gastos de personal, entre ellos el sueldo del Médico forense, de material, de alquileres, de subvenciones, obras e imprevistos, nutriendose con ingresos procedentes del repartimiento girado entre los pueblos que constituyen el partido judicial y de resultados de ejercicios anteriores;

Resultando que V. S. devolvió sin aprobar el presupuesto de referencia con fecha 17 del pasado mes de Enero, manteniendo tal resolución por las de 19 del propio Enero y 9 de Febrero, fundándose en la Real orden de 27 de Abril de 1923, en vista de lo que la Alcaldía de Aracena recurre a este Ministerio, según escrito de 11 de dicho Febrero, alegando que por la misma y con el carácter de Presidente de la referida Junta carcelaria, o sea de los treinta pueblos que componen el partido judicial, se formó en 17 de Diciembre último como venía haciéndose en años anteriores, el presupuesto ordinario para el ejercicio de 1924-25, pero no para los gastos carcelarios, sino solo para atender a los Forenses de la Cárcel, para sus atenciones de justicia, que deben abonarse entre todos los pueblos que constituyan el partido judicial, y que el Estado no satisface, según expresó la Real orden de 27 de Noviembre de 1922, declarando terminantemente quedaban a cargo de los Ayuntamientos las atenciones de justicia por no ser estrictamente carcelarios, como son los sueldos del Médico forense, Practicante y Barbero, alquiler de la casa para Archivos judiciales, subvención a la Junta de Patronato para que pueda atender a los benéficos fines que la están encomendados y otros varios gastos del Juzgado, y subvenciones que han de darse para que puedan ser atendidas las necesidades de la Cárcel por no estar dotadas suficientemente con las consignaciones del Estado, y que si no se gratificaran no habría quien las sirviera; y convocada dicha Junta para el día 29 del mismo mes de Diciembre próximo pasado, según consta en el expediente respectivo, se reunió, y sin discusión y por unanimidad, aprobó el presupuesto, como era lógico, por entender que estaba hecho y ajustado a las prescripciones legales, pues de lo contrario no habría en la Cárcel Médico forense, Practicante y Barbero, ni cubiertas ninguna de las atenciones que constan en el presupuesto y privados; por tanto, de tan humanitario servicio y atenciones los desgraciados reclusos en ella, y en su virtud, se le remitió aprobado a V. S. por si tenía a bien prestarle su superior sanción, para después publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la cantidad que correspondía a cada Municipio y que debiera abonar en su día; pero la Alcaldía recibió sin aprobar el aludido presupuesto, con el apercibimiento para la misma, y en particular para el Secretario del Ayuntamiento, de que en lo sucesivo se abstuviera de remitir a ese Gobierno documentos no autorizados por las disposiciones vigentes;

Resultando que en el anterior escrito se formula la súplica de que si no procede la determinación tomada por V. S., se revoque y en su lugar se declare bien formado el presupuesto, aprobándolo y expresando el nombre que deben llevar en lo sucesivo estas Juntas de partido en sustitución de las carcelarias; y si a ello lugar no hubiere y estar bien tomada la determinación de V. S., declarar que lo mismo que han sido cargas del Estado las atenciones carcelarias, lo son también las forenses que se determinan en el presupuesto, y, por tanto, que

los pueblos todos están exentos de pagar nada que afecte a las Cárcels del partido ni Juzgados de instrucción, pues de lo contrario, si el Estado no las satisface, ni las Juntas carcelarias o forenses tampoco las pagan, de dónde van a abonarse;

Considerando que por el párrafo quinto del artículo 4.º de la ley de Presupuestos de 26 de Julio de 1922 se autorizó al Gobierno para incorporar al presupuesto del Estado la totalidad de las obligaciones que, «siendo suyas», pesaban entonces sobre las Corporaciones provinciales y municipales con motivo del servicio carcelario y de manutención de presos;

Considerando que el Real decreto de 18 de Octubre de 1922, promulgado por la Presidencia del Consejo de Ministros, aplicó la autorización de que antes se ha hecho mérito y dispuso, en el párrafo segundo de su artículo 1.º, que las obligaciones de la Administración de justicia y cualesquiera otras que no tengan carácter enteramente carcelario, que por entonces también sufragaban las Corporaciones provinciales y municipales con cargo a sus presupuestos, seguirán satisfaciéndose por las mismas;

Considerando que, conforme a la Real orden de 27 de Noviembre de 1922, número 2.º, se declaró que en virtud de la norma fijada por el artículo 1.º, párrafo segundo del mencionado Real decreto de 18 de Octubre anterior, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, para deslindar la imputación de los gastos figurados en los presupuestos de las Corporaciones, no serán de cuenta de la Administración de Prisiones y seguirán a cargo de los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales todos los que no tienen naturaleza estrictamente carcelaria, como los referidos a la Administración de justicia, para casas, alojamientos, haberes de Médicos forenses, asignaciones de material, de diligencias especiales, etcétera, estableciéndose además que no se reconocerá ningún devengo por servicios realizados, mediante acuerdo o nombramiento de las Corporaciones, en concepto de Demandaderos, Barberos, Practicantes, Ordenanzas, Escribientes, Depositarios, Contadores, Maestros, Capellanes y cualesquiera otros análogos, no admitiéndose en los Establecimientos otra actuación que la encomendada a los funcionarios del servicio de Prisiones.

Vistas las disposiciones de que se deja hecho mérito y el Estatuto municipal vigente,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver el caso de referencia con carácter general, en el sentido de que los Ayuntamientos deben continuar abonando las obligaciones de la Administración de justicia que figuraban en sus presupuestos carcelarios, ya que la supresión de éstos ha de referirse exclusivamente a las atenciones de carácter carcelario, que hoy dependen del Ministerio de Gracia y Justicia, mancomunándose al efecto los Ayuntamientos, con arreglo a lo establecido en el Capítulo II del Estatuto municipal.

De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento, el de la Corporación municipal y efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 26 de Mayo de 1924.

El Subsecretario encargado del despacho,
MARTINEZ ANIDO

Señor Gobernador civil de Huelva.

Vías pecuarias

REAL DECRETO

A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente del Directorio Militar, de acuerdo con éste,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las vías pecuarias son bienes de dominio público y están destinadas al tránsito de los ganados. En tal concepto, no serán susceptibles de prescripción y no podrá alegarse para su apropiación el mayor o menor tiempo que hayan sido ocupadas, ni en ningún caso podrán legitimarse las usurpaciones de que sean objeto. Corresponde a la Administración el restablecimiento y reivindicación de las vías pecuarias usurpadas, cualquiera que sea la fecha de su ocupación, salvo los casos en que se haya legitimado, conforme a las leyes, el derecho adquirido, haciéndose la adquisición irreivindicable.

Artículo 2.º Se procederá a la clasificación, por provincias, de las vías pecuarias, en vías pecuarias necesarias para el uso y paso de los ganados y vías pecuarias innecesarias.

Las primeras continuarán bajo la custodia de la Asociación de Ganaderos, destinadas al servicio de la ganadería, y las segundas serán enajenadas.

Artículo 3.º La anchura de las vías pecuarias es la siguiente: cañadas, 75 metros 22 centímetros, equivalentes a 90 varas; cordeles, 37 metros 61 centímetros, equivalentes a 45 varas; veredas, 20 metros 89 centímetros, equivalentes a 25 varas.

La anchura de las coladas y la extensión de los descansaderos y abrevaderos será la que resulte de los antecedentes que en cada caso existan; pero en ninguno podrán las primeras ser de mayor anchura que las señaladas para los cordeles y veredas.

Artículo 4.º Para la clasificación, demarcación y deslinde de las vías pecuarias, el Ministerio de Fomento designará los Ingenieros Agrónomos y Peritos agrícolas que, según propuesta de la Asociación general de Ganaderos, sean necesarios; este personal prestará sus servicios con arreglo a la instrucciones que al efecto reciba de la Asociación general de Ganaderos.

Artículo 5.º La clasificación, dentro de cada provincia, se practicará por términos municipales, oyendo al Ayuntamiento y Junta local de Ganaderos respectivos.

El proyecto de clasificación de las vías pecuarias de cada término municipal se pondrá de manifiesto al público en el Ayuntamiento respectivo, por plazo de diez días, pasando el cual, el Ayuntamiento lo remitirá a la Asociación y ésta lo elevará al Ministerio de Fomento, para su resolución definitiva, en unión de las reclamaciones formuladas dentro del mismo plazo y acompañado del informe del Ingeniero que hubiera practicado el servicio del de la Asociación.

En el proyecto se determinará:

- a) Las vías pecuarias, cuya conservación se considere necesaria con su dirección, anchura y eje.
- b) Vías innecesarias con su extensión, dirección y eje.

c). Sobrantes de vías Pecuarías con su extensión. Se entenderá por sobrante la parte de su anchura que exceda de la que corresponda, según la clasificación del artículo 3.º

Para la redacción del proyecto y determinación de la existencia de las vías pecuarias y anchura, se tendrán en cuenta los deslindes, apeos y demás documentos existentes en el Archivo de la Asociación general de Ganaderos y los que obren en el Archivo municipal, y como elemento supletorio la información testifical que se practique.

No se podrá en un término clasificar como innecesaria que sea continuación o enlace de las ya clasificadas como necesarias, o que por la Asociación así se conceptuara en otros términos.

Artículo 6.º Al proyecto de clasificación se acompañarán:

Primero. La instancia del Ayuntamiento y los interesados para variar el trazado de cualquier vía pecuaria declarada necesaria, cuando ésta atraviere terrenos de regadío, plantaciones, cultivos u obras públicas de interés general. En estos casos se ofrecerán terrenos en permuta que enlacen a su entrada y salida con la continuación de la vía, valorándose los terrenos y objeto de la permuta e informando sobre ella el Ingeniero que practique la clasificación.

Segundo. Las instancias o propuestas de modificaciones en el trazado de las vías pecuarias cuando atraviesen zonas edificadas o edificables en el ensanche de las poblaciones o afecten a edificaciones hechas, siempre que quede asegurado el tránsito de ganados.

El terreno que ocupen los edificios o solares será valorado y compensado en la propuesta con terrenos ofrecidos para asegurar el paso o con el pago del terreno ocupado. Si por los interesados no se ofrecieren terrenos para el nuevo trazado o no fuere la variación aceptable, perderán todo derecho a lo edificado o plantado y será reivindicado con el terreno al practicarse el deslinde.

Igualmente se podrá variar el trazado de las vías pecuarias o reducirse su anchura en los sitios por donde atraviesan poblaciones. En estos casos los Ayuntamientos propondrán la forma de dar paso a los ganados y rebaños, o cederán terrenos en compensación, para evitar su paso por las poblaciones.

Artículo 7.º El Ministerio de Fomento, oído el informe de la Asociación general de Ganaderos, aprobará el proyecto de clasificación de las vías pecuarias en cada término municipal, resolviendo sobre todos los casos de permuta y variación de trazado propuestos con arreglo al artículo anterior. Esta resolución será firme y contra ella no se dará recurso en la vía administrativa.

Artículo 8.º Aprobada por el Ministerio de Fomento la clasificación de las vías pecuarias de un término, se procederá al deslinde definitivo de las de interés general o local, declaradas útiles para la ganadería, con sujeción a las reglas siguientes:

1.ª Se acordará la operación por el Gobernador civil de la provincia, a propuesta de la Asociación general de

Ganaderos, anunciando la operación en el *Boletín Oficial* y por edictos, con quince días de anticipación.

2.ª El Gobernador civil de la provincia nombrará Delegado suyo para el deslinde al Ingeniero o Perito agrícola que le proponga la Asociación general de Ganaderos, al que podrá acompañar a la práctica del deslinde una representación del Municipio y de la Junta local de ganaderos.

3.ª Se colocarán hitos o mojones y se levantarán planos de las vías.

4.ª Se sujetará, para el deslinde, a la clasificación aprobada por el Ministerio de Fomento y a los documentos y elementos de prueba indicados en el art. 5.º

5.ª En el acto del deslinde, el Ingeniero o Perito designado precisará, en nombre de la Administración, conforme al artículo 1.º, todos los terrenos usurpados.

6.ª Los hitos y gastos del deslinde serán satisfechos por los que aparezcan intrusos, si existieren. De no haberlos, por el Ayuntamiento, caso de existir terrenos paro la venta, y, en último caso, por la Asociación.

Artículo 9.º Los propietarios colindantes podrán concurrir al acto del deslinde, haciendo las alegaciones y presentando los documentos que estimen oportunos al comenzar las operaciones. Las informaciones posesorarias presentadas por los propietarios colindantes no tendrán ni fenderán valor ni eficacia para impedir la reivindicación de terrenos usurpados a las vías pecuarias si no se acredita por ellas posesión quieta y pacífica durante treinta años, en armonía este precepto con el artículo 1.º

Artículo 10. De las operaciones de deslinde se levantará acta por duplicado, con los planos de las vías deslindadas. Estas actas se pondrán de manifiesto, por el plazo de diez días, en el Ayuntamiento.

Contra el deslinde podrán presentarse reclamaciones durante los diez días siguientes. Una vez transcurrido este término, los Gobernadores civiles resolverán sobre las reclamaciones presentadas y dictarán providencia estimándolas o desestimándolas y aprobando el deslinde. Contra la providencia del Gobernador se concede a los particulares y a la Asociación recurso de alzada ante el Ministerio de Fomento, en el plazo de quince días.

Artículo 11. Los que después de efectuado el deslinde usurparen o invadiesen las vías pecuarias, además de hallarse obligados a satisfacer todos los gastos que el restablecimiento ocasione, incurrirán en una multa a razón de una peseta por metro cuadrado, y los reincidentes en el triplo. El que alterase o quitase los mejores será además sometido a los Tribunales de Justicia. Los que cortaren árboles o leña o aprovecharen frutos de los mismos en vías pecuarias, incurrirán en una multa igual al duplo de los productos, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pudieran incurrir. Las multas y responsabilidades a que se refieren los párrafos anteriores serán impuestas por los Gobernadores civiles, previo informe de la Sección Agronómica, a propuesta de la Asociación general de Ganaderos, Autoridades municipales o Guardia civil. El pago de las multas se efectuará en el plazo de diez días, pasado el cual se iniciará la vía de apremio y pasarán a la Audiencia judicial.

(Continuará).

Suscripción nunca vista

Manera de que no quede un solo Alcalde sin que reciba esta Revista, la más antigua en su clase y la que mayores beneficios reporta a dicha benemérita clase.

A los pocos que quedan por suscribirse les regalaremos desde hoy a fin de Julio próximo y abonen las 15 pesetas que cuesta al año:

Un ejemplar de «La Cartera del Alcalde», indispensable en su casa por tenerlo que consultar constantemente.

Un lápiz mecánico y eterno, chapado en oro, con su gancho para llevarlo colgado, depósito de minas y goma para borrar, invención práctica y cómoda.

Cincuenta cartas con sus sobres.

Un estuche con plumas de diferentes clases, palilleros y lápices para toda clase de trabajos caligráficos.

Cincuenta libramientos, veinticinco cartas de pago y veinticinco cargaremes.

Un cuadro de Audiencia pública para fijarlo en la puerta del Ayuntamiento.

OTRA SUSCRIPCION.—Al que abone 25 pesetas, además de todo lo que corresponde a la suscripción de 15 pesetas, un precioso reloj de pared, tamaño pequeño, de pesas y presentación elegante, propio para oficina y hora exacta.

Al que no recoja estos regalos en la Administración, deberá abonar dos pesetas para su remisión y embalaje. Tenemos probados estos relojes de pared y garantizamos su buena marcha.

Manual del Secretario de Ayuntamiento

PUBLICADO POR LA REVISTA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

“EL ALCALDE”

BAJO LA DIRECCIÓN DEL LETRADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID

D. ENRIQUE GARCIA Y GARCIA

Contiene el Estatuto municipal vigente, con la indicación del modo de realizar los servicios por el mismo ordenados, con amplia explicación de los casos dudosos, y procedimiento para interpretar rectamente sus disposiciones, con formularios de aplicación práctica, tanto en lo que afecta a la aplicación de la Ley, cuanto a los demás servicios que han de cumplimentarse por los Ayuntamientos.

Precio: DIEZ PESETAS en rústica y DOCE en tela.

Esta Revista lo remite previo pago de su importe.

Modelación ajustada al Estatuto Municipal

Acta para Constitución de Ayuntamiento de Concejo
Abierto. 0,25

Libros de Actas del Ayuntamiento en Pleno.

De 25 folios encuadernado a la holandesa. 4,00 Ptas.

De 50 » » » 6,00 »

De 100 » » » 7,50 »

Libros de Actas de la Comisión Permanente del Ayuntamiento.

Los mismos precios que para el anterior.

PRESUPUESTOS

Libro que obliga a llevar el artículo 576 del Estatuto, con los demás formularios y certificaciones, todo el servicio 5 pesetas.

Lote de toda la modelación para el Presupuesto ordinario, con su copia certificada y libro 5 pesetas.

CONTABILIDAD

Libro Diario y Mayor para el nuevo Regimen rayado comercial. Los mismos precios en igualdad de folios.

MULTAS

Libro Registro de multas.

Libros Auxiliares de Contabilidad para arbitrios Municipales. A los mismo precio indicado anteriormente.

REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE DOCUMENTOS

De 25 folios en rústica. 2,00 Ptas

De 50 » en holandesa. 5,00 »

Los pedidos a la Administración de esta revista previo pago y franqueo de envío.

Tip. “López” San Hermenegildo, 7.

Ayuntamiento de Madrid

Oposiciones a Secretarios de Ayuntamientos

Las contestaciones al programa oficial, que se publican en breves días, las facilitará esta Revista, bajo la dirección del ilustre Abogado del Colegio de esta Corte D. Manuel Aleu, perito tan reconocido en toda la nación en las cuestiones de Ayuntamientos y Administración local y también expresadas que no hace falta academia ni otra preparación.

Precio: 40 pesetas. Pago al solicitarla

Con las contestaciones se acompaña gratis un tomo de formularios prácticos de más de seiscientas páginas.

Pídanse al administrador de *El Alcalde* o a la librería de Fe.

En la *Gaceta* del 15 se halla inserta la convocatoria, cuyas oposiciones empezarán el 1.º de Octubre, y las solicitudes para tomar parte en ellas se han de presentar hasta el 30 de Junio.

Las plazas de Secretarios abren un gran porvenir a la juventud estudiosa, pues por el nuevo Estatuto Municipal son inamovibles, disfrutan de sueldos remuneradores y adquieren derechos pasivos.

Esta Administración servirá las contestaciones, o sea el programa contestado, por correo a los que las pidan, y se encarga gratuitamente de presentar la documentación para tomar parte en las oposiciones.

Certificado de penales y últimas voluntades

Para sacar certificaciones de últimas voluntades, han de mandar las certificaciones de defunción del causante y 4,50, en vista que desde primero de año exigen en la Dirección de Registros y Penales 50 céntimos de aumento, y si se desean enseguida, 50 céntimos más para sello de urgencia. Toda petición de certificado que no venga acompañada de su importe, se dará por no recibida.

Las de penales hacen falta mandar el nombre y dos apellidos y naturaleza, nombre de los padres, edad, profesión y objeto para que se pida la certificación y 4,50 en sellos o giro postal, y si se quiere urgente cinco pesetas.

También nos encargamos de legalizar documentos y cuantos asuntos ocurran para esta capital.

Estatuto Municipal

Para la constitución y funcionamiento de los Ayuntamientos

Se servirá con comentarios y notas, a la mayor brevedad posible, a todo el que mande en sellos o Giro postal TRES PESETAS a la Administración de esta Revista.

Impresos especiales fuera de Catálogo

Expediente completo de Juicio de Faltas por daño, con su papeleta de citación, una peseta.
Expediente de Juicio Verbal Civil, 0,75 pesetas.

NUEVO CENSO ELECTORAL

TENEMOS COMPLETA LA MODELACIÓN PARA ESTE SERVICIO

	Pesetas.
Acta para la constitución de la Junta Municipal.	0,10
Papeletas citando a los que han de constituir la Junta Municipal.	0,02
Boletín solicitando la inscripción oficio de remisión.	0,05
Relaciones certificadas de los varones y hembras mayores de veintitrés años acogidos en establecimientos benéficos o autorizados para implorar la caridad pública.	0,05
Acta para la división en circunscripciones.	0,08
Bando anunciando al público la lista electoral.	0,05
Acta de examen de reclamaciones.	0,08

CUENTAS

	Pesetas.
Libramientos y cargaremes con matriz con arreglo al Estatuto municipal.	
Bloch de 25.	2,50
Idem de 50.	5,00
Idem de 100.	10,00